

SESIONES ORDINARIAS

2000

ORDEN DEL DIA N° 1019

COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Impreso el día 11 de octubre de 2000

Término del artículo 113: 23 de octubre de 2000

SUMARIO: **Desafuero** del señor diputado Jorge Giles. Desestimación. (163-O.V.-2000.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado la solicitud de desafuero al señor diputado Jorge Giles; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Rechazar *in limine* el pedido de desafuero al señor diputado Jorge Giles (expediente 163-O.V.-2000) en virtud del artículo 5° de la ley 25.320 comunicándose –por intermedio de la Presidencia de la Honorable Cámara– al magistrado interviniente.

Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2000.

Elisa M. A. Carrió. – Carlos E. Soria. – Ramón H. Torres Molina. – Teodoro R. Funes. – Guillermo H. De Sanctis. – Eduardo R. Di Cola. – José M. Díaz Bancalari. – Nilda C. Garré. – Norma Godoy. – Guillermo R. Jenefes. – Adrián Menem. – María C. Merlo de Ruiz. – Alberto A. Natale. – Héctor T. Polino. – Atilio P. Tazzioli. – Juan M. Urtubey. – Silvia B. Vázquez. – Alfredo H. Villalba.

INFORME

Honorable Cámara:

La Constitución Nacional otorga prerrogativas al Poder Legislativo para asegurar el libre ejercicio de

la función. El propósito de las prerrogativas parlamentarias es el de asegurar, por diversos medios, la indispensable independencia del órgano legislativo frente al comportamiento de cualquier naturaleza originados en el sector público o el sector privado, es evidente, por lo tanto que no han sido establecidos para beneficio personal de los miembros de aquél sino para proteger y asegurar la libertad de acción del cuerpo que componen.

Joaquín V. González los ha definido de la siguiente manera: “Entiéndase por privilegios parlamentarios o del Congreso, todos los derechos y poderes peculiares de las asambleas legislativas, indispensables para su conservación, independencia y seguridad, tanto respecto de sus miembros, como del conjunto de la corporación. Tales prerrogativas son, en general, excepcionales con relación a los otros poderes del gobierno, y tienen su fundamento en el origen popular del que derivan”.

La Corte Suprema, en el caso Alem del año 1893, sostuvo que “la Constitución no ha buscado garantizar a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien se hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no sólo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución”.

La Constitución consagra como prerrogativa personal de los legisladores la de gozar de inmunidad de expresar libremente sus opiniones.

En efecto, el artículo 68 de la Constitución Nacional establece: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.

La razón de ser de esta disposición es clara: si los miembros del Congreso no estuvieran protegidos contra los que intentaran cohibirlos en la expresión de sus ideas, la independencia del Poder Legislativo estaría seriamente comprometida. Los legisladores no se sentirían en condiciones de opinar libremente sobre cuestiones referidas a su función o cuestiones de interés político en general si pudieran ser alcanzados por reacciones de cualquier naturaleza originadas en sus manifestaciones.

Tiene dicho la Corte Suprema que la inmunidad es absoluta, pues ello hace a su eficacia.

La Corte manifestó en el caso “Fiscal c/Benjamín Calvete”, del 19 de septiembre de 1864, que esta inmunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto. Concretamente expresó: “Atendiendo los fines que se propone la misma Constitución, disponiendo en su artículo 60, que los miembros del Congreso no pueden ser acusados, interrogados, ni molestados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su mandato de legisladores, esta inmunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto, porque si hubiera un medio de violarla impunemente, él se emplearía con frecuencia por los que intentaren coartar la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio y frustrada la Constitución en una de sus más sustanciales disposiciones”.

La Constitución otorga inmunidad de expresión a los legisladores en sentido amplio y absoluto, es decir, no cabe acusación, interrogatorio judicial ni molestia por las opiniones vertidas por miembros

del Poder Legislativo. Así ha sido reconocido por la ley 25.320 que dispone el rechazo *in limine* de cualquier pedido de desafuero, para el caso causas originadas en opiniones vertidas por legisladores durante el ejercicio de su mandato.

La ley recientemente sancionada, sobre régimen de inmunidades, concretamente dispone en su artículo 5° que “en el caso del artículo 68 de la Constitución Nacional, se procederá al rechazo *in limine*” de cualquier pedido de desafuero. La ley ha recepcionado la jurisprudencia de la Corte Suprema, que tiene dicho que el artículo 68 de la Constitución Nacional no sólo consagra inmunidad de sanción, sino inmunidad de proceso.

La inmunidad de opinión protege opiniones y discursos, incluyendo toda expresión oral y escrita en cumplimiento de su función. Y como hemos dicho, quedan comprendidas las opiniones realizadas fuera del Congreso de la Nación (recinto o comisiones parlamentarias).

En definitiva, el artículo 68 de la Constitución Nacional debe ser interpretado en sentido “amplio y absoluto”, y es así porque no se concibe un cuerpo legislativo cuyos miembros no estén eficazmente amparados con inmunidad de opinión, ya que la libertad de expresión es un pilar esencial para el funcionamiento del Parlamento. Así ha sido reglamentado por la ley 25.320.

Atento que los pedidos de desafuero en cuestión se refieren a causas judiciales iniciadas con motivo de opiniones vertidas por legisladores durante el desempeño de su función, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Nacional y el artículo 5° de la ley 25.320, propiciamos su rechazo *in limine*.

Elisa M. A. Carrió.

ANTECEDENTE

Ver expediente 163-O.V.-2000.